

La Junta no hará más ajustes y achaca el 1,13% de déficit al gasto por hepatitis C

LALIA GONZÁLEZ-SANTIAGO



✉ @Laliags

Asegura que habría sido el 0,64% sin este capítulo, que el Gobierno se comprometió a no imputar, y la liquidación negativa de 265 millones

SEVILLA. Andalucía no hará ajustes adicionales para cumplir el objetivo de déficit y se propone continuar la batalla a nivel técnico para defender su cifra. Así lo aseguró ayer la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, después de que el Ministerio situara el déficit de la Junta en el 1,13%, pese a que la cifra de cierre dada por el Gobierno autonómico fue del 0,81, cuando el objetivo de 2015 estaba en el 0,7%.

La consejera mantiene que el cumplimiento andaluz ha sido «muy razonable» y achaca la desviación registrada ahora por Hacienda a que el Gobierno central, en contra de lo que había prometido, ha imputado al déficit de las comunidades autónomas el gasto en los tratamientos de hepatitis C. Cuando los pacientes de esta enfermedad reclamaron los costosos tratamientos, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, aseguró que el gasto no contaría en la última línea de la contabilidad regional, pero no ha sido así y ello ha supuesto elevar el déficit andaluz en 200 millones de euros. Montero considera que de este modo «el gobierno una vez más falta a su

Montero urge el reparto de los nuevos fondos del FLA

La consejera urgió el reparto del próximo Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y rechazó que se le condicione para recibirlo. Las comunidades «tenemos dos planes de ajuste, uno el plan de ajuste de la Ley de Sostenibilidad y otro el plan de ajuste que se deriva de la condicionalidad del FLA, que es obligado para la que no cumple». «Es una doble imposición de ajuste para las comunidades que tienen dificultades para la emisión de deuda hacia los mercados», lamentó. El Gobierno de España «se ha escondido detrás del FLA para que no se afronte la necesaria reforma del modelo de financiación».

palabra y mantiene la estrategia de culpabilizar a las comunidades» de la desviación.

La Consejería de Hacienda asegura que hubiera cumplido con creces de no ser por este capítulo y por otras «sorpresas», que atribuye a «nuevos incumplimientos del Gobierno de España, que intenta descargar en las autonomías su incapacidad en política económica». Se trata de la negativa del ejecutivo central de aplazar la devolución de los 265 millones de la liquidación negativa de 2013, que Rajoy se negó a aplazar y fraccionar, a pesar de haberlo comprometido, y que situó el dato en el 0,81% del PIB.

Pero si se suma a ello otros ajustes «más que cuestionables» en partidas como universidades, o fondos europeos, además de una discusión técnica en relación a la estimación del PIB, la consejería asegura que el déficit andaluz hubiera quedado por debajo del objetivo, en el 0,64%. Por ello, María Jesús Montero, que compareció ayer en la comisión del Parlamento, aseguró que sus técnicos continuarán «el diálogo» para defender los criterios expresados por la Intervención General de la Junta de Andalucía ante la Intervención General del Estado, ya que el 1,13%, «a pesar de ser un buen dato, es un dato provisional».

Tercera comunidad

Montero defendió que Andalucía es la tercera comunidad de régimen común con menos déficit y éste se sitúa medio punto por debajo del conjunto de las comunidades. Y ello después de «compaginar la responsabilidad con el impulso de políticas de desarrollo, el fortalecimiento de los servicios públicos y la recuperación de derechos de los empleados públicos. Por contra, resaltó que el Gobierno de España ha incumplido su objetivo de déficit del 4,2% que tenía como objetivo hasta el 5,16% definitivo. Además, destacó que ello se ha producido a pesar que el esfuerzo de reducción del déficit según el reparto fijado por el Gobierno era 8 veces mayor para las comunidades autónomas, que corren con la mayor parte del gasto social, que para la Administración General del Estado.

Sin embargo, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, rechazó la explicación de la consejera y emitió un comunicado en el que le pide que «no mienta» y «deje de buscar subterfugios» ya que los gastos derivados del tratamiento de la hepatitis C «no penalizan ni obligan a esfuerzos adicionales ni medidas especiales». No obstante, otras comunidades, como Castilla León, del PP, o la Generalitat catalana también atribuyeron al gasto en hepatitis C y al incumplimiento la desviación.